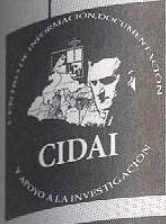


El Salvador



Proceso

informativo semanal

Año 28, N° 1247

Junio 27, 2007

ISSN 0259-9864

"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría

Los resultados de Aparecida Número monográfico

El oportunismo político sin límites

Hace algunos días ha trascendido en los medios de comunicación, el interés del Partido de Conciliación Nacional de revivir la cuestionada plancha nacional, anteriormente conocida como circunscripción nacional, que fue abolida en 2005 luego de que la Asamblea Legislativa decidiera acatar un fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia en 2002. La resolución de la Corte Suprema se fundamentó en que el mecanismo era contrario a la proporcionalidad de los votos obtenidos por cada partido, es decir, que no reflejaba fielmente la población votante por departamento. La decisión de la Asamblea Legislativa de atender la resolución de la Corte Suprema contó en aquel momento con el consenso de todos los partidos políticos, incluyendo el propio PCN y buscaba en la práctica, que el trabajo legislativo respondiera más a los intereses del electorado y en menor medida a los lineamientos de las cúpulas partidarias. De cara al avance logrado, la posibilidad de reinstalar este obsoleto mecanismo planteado por el partido de las manitas, constituiría un franco retroceso en materia electoral y una clara violación a la Constitución de la República. A nivel partidario, la propuesta refleja además el absoluto desprecio de algunos institutos políticos por la institucionalidad y la legalidad que han jurado defender. Muestra claramente cómo ciertos partidos y actores políticos están dispuestos a violentar las reglas del juego democrático y el Estado de Derecho en función de sus intereses personales y partidarios. Lo que hay de fondo en esta iniciativa es el intento de garantizar la permanencia casi vitalicia de cierto grupo de dirigentes políticos en la asamblea, independientemente del grado de apoyo que logren en el electorado.

Es claro que el Sr. Ciro Cruz, quien ahora abandera esta iniciativa, quiere agenciarse a cómo de lugar un puesto en la Asamblea Legislativa, luego que en las pasadas elecciones haya quedado fuera al no conseguir los

votos necesarios en su propio departamento. Es obvio que al PNC les fallaran las cuentas, pues aunque luego de las elecciones del 2006, el partido creció de 6 a 10 escaños, con el anterior sistema de la plancha electoral, este partido hubiese obtenido 12 diputaciones, en vez de 10. Ante este escenario, no sería remoto que el PCN negociara con ARENA, resucitar la extinta plancha nacional a través de una reforma al código electoral. Y es que en la práctica el PNC cuenta con un elevado grado de poder al interior de la Asamblea Legislativa, al ser la pieza clave en la aritmética de la mayoría simple, lo que les permite canjear convenientemente sus votos con ARENA.

No cabe duda que el oportunismo político y la desfachatez sigue siendo la tónica predominante entre algunos miembros de nuestra clase política, quienes ven la función pública como un instrumento para favorecer sus intereses partidarios y preservar los privilegios que les ofrecen sus cargos. Mientras tanto las propuestas de reformas al sistema electoral y político, consideradas claves para transparentar los procesos electorales y el sistema de partidos políticos, tales como la despartidización del Tribunal Supremo Electoral, la creación de una ley de partidos políticos, la implementación del voto residencial y de salvadoreños en el exterior, entre las más importantes, siguen sin ser aprobadas debido a la falta de voluntad política. De hecho ya el Tribunal Supremo Electoral adelantó que el voto residencial que posibilitaría acercar las urnas a la población, solo se implementará en 17 de los 262 municipios del país, lo que representa menos del 7 por ciento de todo el territorio nacional. Como es evidente, este y otros temas sustanciales de la reforma electoral continúan entrampados desde hace varias elecciones, debido a que los partidos de derecha no lo consideran favorable a sus intereses partidaristas.

Sin embargo, temas como la separación de las elecciones, rápidamente generaron re-

acciones entre los partidos, quienes adelantaron sus posturas, en función de sus cálculos electorales. Y es que con mucha seguridad, el criterio que pesó para tomar la decisión de separar las elecciones fue nuevamente de índole partidario, y no de carácter técnico. Los intereses sectoriales y partidarios se impusieron nuevamente sobre los intereses y la conveniencia de los cada vez más desencantados ciudadanos, quienes ven acrecentada su desconfianza en el sistema político. Esta decisión que ya fue aprobada por el Tribunal Supremo Electoral, no deja de ser polémica por el desgaste y las implicaciones prácticas que para el electorado pueda tener asistir a un segundo, y muy probablemente a un tercer evento electoral, en el caso de que se decidiera ir a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Y es que al analizar los posibles escenarios que se presentaran en elecciones separadas, es posible advertir que se presente un mayor grado de abstencionismo que el consignado en las elecciones del 2006, el cual alcanzó el 47 por ciento.

El elevado grado de abstencionismo entre la población salvadoreña, podría incrementarse en esta oportunidad por el fastidio que puede producir en la población una prolongada y polarizada campaña electoral. Su repercusión en la participación electoral debió ser analizada seriamente. Pues aun cuando los políticos anticipan que en estas elecciones se puede movilizar un mayor número de votantes, dada la relevancia del evento, a excepción de las elecciones del 2004, las tendencias de la participación electoral han mostrado una clara disminución desde 1994. Aunque es posible que esto cambie en función de los candidatos, la estrategia de campaña y la dinámica política que se genere en el evento electoral, la escasa confianza en los partidos y en el sistema electoral sigue teniendo un peso significativo en los bajos niveles de participación electoral.

De hecho, los partidos políticos y la Asamblea Legislativa son dos de las instituciones que gozan de menor confianza ciudadana, pese a que han sido creadas para representar los intereses de los ciudadanos. Los

resultados de la encuesta de evaluación del año 2006 muestran que la Asamblea Legislativa es según los ciudadanos, la cuarta institución menos confiable, mientras que los partidos políticos se ubican en el nivel más bajo de confianza ciudadana. Al analizar la relación entre la confianza en las instituciones y el interés que la gente expresa en asistir a las urnas, se encuentra que en la medida en que se erosiona la confianza en instituciones claves del sistema político y electoral, se reduce el interés por participar en las elecciones. Y es que a medida decae la legitimidad de las instituciones, se reduce la credibilidad en el proceso electoral. Los datos de las últimas tres encuestas preelectorales muestran que más del 40 por ciento de la población expresaba que las elecciones serían fraudulentas, lo cual refleja claramente la falta de confianza que un importante segmento de ciudadanos le adjudica a los más recientes procesos electorarios.

A pesar de que estos elocuentes indicadores son reiterativos en los diferentes sondeos de opinión, no parecen tener eco entre muchos de nuestros políticos, quienes se resisten a reconocer la acentuada pérdida de legitimidad que han ido experimentado con el paso del tiempo entre la ciudadanía. Muchas de sus erradas actuaciones, oportunismo político e irrespeto a la legalidad, como el expresado nuevamente por el partido de las manitas al buscar revivir la extinta plancha nacional, solo continúan profundizando el descrédito y la desconfianza de los políticos ante el ciudadano. El claro interés de algunos partidos en impulsar únicamente aquellas propuestas que les son convenientes a sus intereses, desatendiendo u obstaculizando las reformas sustanciales, consideradas claves para democratizar y transparentar el sistema político y electoral del país, solo contribuirá a restarle cada vez más legitimidad a los futuros procesos electorarios y a reducir la participación política de los ciudadanos. En este contexto, se vislumbra cada vez más remota la posibilidad de consolidar el tan ansiado sistema democrático.